



AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Sandra Milena Castro
DEMANDADO	Fundación Universitaria San Martín
RADICADO	05-266-31-05-001-2018-00421
TEMA	Despido Injusto
DECISIÓN	Revoca y Confirma sentencia

El veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA, HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 115** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido **SANDRA MILENA CASTRO** contra **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, con radicado 05-266-31-05-001-2018-00421.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se declare que existió con la demandada un contrato de trabajo a término fijo de un año, que inició el 21 de enero de 2013 el cual terminó sin justa causa, el 21 de enero de 2017 y fue terminado de forma irregular, dado que fue notificado con 20 días de anterioridad, razón por la cual se debe pagar la indemnización por terminación de contrato sin justa causa, debidamente indexada.

Que se declara que a la terminación del contrato se le quedaron adeudando, cesantías del año 2014, 2016 y la proporcional del año 2017, intereses a las cesantías proporcionales del año 2017, primas causadas en el año 2016 y proporcionales del año 2017, vacaciones del año 2015, reajuste salarial al cargo desempeñado conforme el OTRO SI, desde el 5 de mayo de 2015 a julio de 2016, pago de los aportes a la seguridad social por once meses descontados de su salario y no pagados.

Como consecuencia de las declaraciones solicita se condene a la demandada a pagar, cesantías del año 2014 – 2016 y la proporcional del año 2017, intereses a las cesantías proporcionales del año 2017, primas causadas en el año 2016 y proporcionales del año 2017, vacaciones del año 2015, reajuste salarial al cargo desempeñado conforme el OTRO SI, desde el 5 de mayo de 2015 a julio de 2016, aportes a la seguridad social por once meses descontados de su salario y no pagados, sanción del art. 65 del C.S.T., sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990 y las costas procesales.

- **HECHOS:**

Como fundamento de las pretensiones indica que entre las partes existieron varios contratos de trabajo que inicialmente fueron a término fijo de tres meses, el primero se dio el 21 de enero de 2013, el cargo inicial fue de auxiliar de biblioteca hasta el 4 de mayo de 2015, a partir del 5 de mayo de ese año empezó a desempeñar el cargo de secretaria de biblioteca en la sede Sabaneta. Para el año 2015 devengaba \$855.000 a partir del 2 de julio de 2016 por petición de la actora se hizo un otro si al contrato por valor de \$1.109.018, valor que no tuvo aumento al momento del despido y se mantuvo durante el período mayo de 2015 a julio de 2016; la labor ejercida por la actora se realizó bajo la jornada máxima permitida, indica la actora que en el último año le hicieron descuentos de parafiscales y los mismos no fueron pagados a las entidades respectivas; indica la demandante que 20 días antes de comenzar el nuevo contrato le fue comunicado que el mismo no se prorrogaría.

Manifiesta la señora Sandra Milena que en el año 2014 no le consignaron las cesantías en el respectivo fondo, además que le quedaron adeudando las cesantías del año 2014, 2016 y las proporcionales de 2017, intereses a las cesantías proporcionales de 2017, primas del año 2016 y proporcionales de 2017, vacaciones de 2015, pago de caja de compensación familiar y aportes a la seguridad social en salud y pensión por once meses.

- **CONTESTACIONES:**

✓ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Frente a los hechos de la demanda manifiesta que se opone a todas las pretensiones, toda vez que a la actora se le cancelaron todas las acreencias laborales conforme a derecho y que el contrato terminó en forma legal, por

vencimiento del plazo. Propone las excepciones de inexistencia de la obligación y Prescripción.

• **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 1 de septiembre de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, **CONDENÓ** a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN** a reconocer y pagar a la señora **SANDRA MILENA CASTRO**, por cesantías del año 2014 la suma de \$733.280,00; por prima de servicios del año 2016 \$1.019.018,00, por vacaciones del año 2017 \$29.721,00; por indemnización por terminación ilegal del contrato de trabajo la suma de \$12.228.216,00 y por indemnización moratoria del art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo \$24.456.432,00, por el período comprendido entre el 22 de enero de 2017 al mismo día y mes del año 2019; a partir del 23 de enero de esta última anualidad, esto es, 2019, la demandada deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, los cuales se pagaran hasta cuando se produzca la cancelación de las condenas impuestas por concepto de cesantías.

**CONDENÓ** a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN** a pagar a Colpensiones y en favor de la demandante, los aportes a la seguridad social en pensiones por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014 y de enero, marzo, abril y mayo del año 2015; tomando como ingreso base de cotización para el año 2014 la suma de \$733.280,00 y del año 2015 la suma de \$644.350,00; lo anterior, previo cálculo actuarial que efectúe Colpensiones.

**ABSOLVIÓ** a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, de las demás pretensiones formuladas en su contra por la parte actora.

**DECLARÓ** PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costa procesales a la demandada, fijó como agencias en derecho la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$2.923.333,00).**

- **APELACIÓN:**

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada, quien en síntesis manifestó: que no está de acuerdo con la sentencia, por: primer reparo por la condena al pago de vacaciones del año 2017, toda vez que en el expediente obra prueba del pago de las misma en la pág 207; el segundo reparo es sobre la terminación del contrato, se tiene que se está hablando de un contrato de trabajo a término fijo y que a la demandante se le entregó con antelación la carta de terminación del contrato, lo cual se dio el 16 de diciembre de 2016, es decir con 36 días de antelación, lo que denota que el juez desconoció el artículo 46 del C.S.T. y el tercer reparo se predica sobre el art. 65 del C.S.T., desconoce el señor juez la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la sanción moratoria consagrada en el art. 65 del C.S.T., donde indican que ello no es automático y que al momento de la terminación del contrato el no pago de prestaciones o de pagos deficitarios está precedida por razones que justifican ese comportamiento y si bien el señor juez habla de los malos manejos de los fondos de la institución, por lo que el problema acá no es de buena o mala fe, es un problema legal como lo indica la Ley, razón por la cual se debe revocar la sentencia de primera instancia y prosperar todas las excepciones.

- **ALEGATOS:**

✓ DEMANDADA:

Una vez transcurrido el término de traslado, la demandada presentó sus alegatos de conclusión, manifestando que,

*“(...) el recurso de apelación que por medio de estos alegatos se soportan, tiene como finalidad que el honorable despacho, **REVOQUE** en lo desfavorable la sentencia del 01 de septiembre de 2022, dictada por el señor Juez Primero (1º) Laboral del Circuito de Envigado.”*

*(...)*

***AL REPARO 1.- Por la condena donde se hace reconocimiento a las vacaciones del año 2017.***

*Sobre este punto basta sólo revisar que fueron debidamente canceladas, conforme aparece soportado en el documento denominado “LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO”, obrante a folio 203 del expediente físico, visto en el acápite “RESUMEN LIQUIDACIÓN DE PAGOS”, apareciendo en “VACACIONES COMPENSADAS: \$1.231.558”, que constituye el reconocimiento que la Fundación Universitaria San Martín, respecto de las vacaciones correspondientes al periodo 2017, y que el juzgado de primera instancia no tuvo en cuenta al momento de fallar en derecho.*

(...)

**AL REPARO 2.- Condena por el supuesto despido injusto o indirecto de la parte demandante, señora Sandra Milena Castro.**

*Referido a este aspecto se cuestiona que el a-quo, que sin ningún rigor determinó sancionar aplicando el artículo 64 del CST, apoyándose en jurisprudencia laboral, que consideramos nada tiene que ver con el caso de estudio, como quiera que si revisa detenidamente el contrato de trabajo es de los denominados contrato de trabajo a término fijo, que se encuentran contenidos en el artículo 46 del CST, y al remitirnos al inciso 1º es preciso remarcar con claridad meridiana que "(...) Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes de avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente".*

(...)

**AL REPARO 3.- Reconocimiento a la indemnización moratoria que trata el artículo 65 de CST.**

*Para iniciar y siguiendo el hilo conductor que se mencionó al momento de interponer el recurso de apelación, destacamos que si bien es cierto existen unos fallos de las Salas Laborales de Descongestión de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto de las sanciones del artículo 99 ley 50 de 1990 y artículo 65 del CST, también es muy cierto que cada caso es muy particular, no siendo pacífica la jurisprudencia existente, por lo que no se pueden tener como el único fundamento y a rajatabla, para sancionar a la entidad demandada, como lo hizo el juez de primer grado.*

(...)"

## CONSIDERACIONES

Con la finalidad de abordar las inconformidades de la parte demandada planteadas en la apelación y referidas a que se absuelvan de todas las condenas impuestas en primera instancia de la indemnización por terminación unilateral del contrato, debe decirse que en el proceso no se discute que las relaciones sostenidas por la demandante con la Fundación Universitaria San Martín, fue mediante contrato a término fijo entre el 21 de enero de 2013 y el 21 de enero de 2017.

Los **problemas jurídicos** a resolver serán los siguientes: **i)** si la terminación del contrato de trabajo del demandante obedeció verdaderamente a un despido injustificado, o si, por el contrario, el contrato fue finalizado de manera legal o con justa causa; de proceder el despido injustificado; **ii)** se analizará y revisará si procede el pago de la indemnización por despido; **iii)** las acreencias laborales adeudadas y **iv)** la prosperidad o no de las sanciones moratorios del artículo 99 de la ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Atendiendo a los principios que informan la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o ésta<sup>1</sup>; e incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen<sup>2</sup>. Los postulados anteriores aplicados a un proceso ordinario laboral significan que al demandante le corresponde demostrar el contrato de trabajo, la remuneración convenida, el despido y los extremos temporales de la mencionada relación de trabajo, entre otros.

Por su parte el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3° de la ley 50 de 1990, expresa:

*“ARTICULO 46. CONTRATO A TÉRMINO FIJO. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.*

*1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.*

*2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.”* (Negrilla fuera de texto).

De la lectura de esta norma se establece que la demandada, en aquellos contratos a término fijo, puede decidir no prorrogar el mismo con el preaviso de mínimo 30 días de antelación, teniendo como referencia el término de duración del contrato de trabajo y, por ende, las fechas de las prórrogas automáticas si se han presentado.

En el presente caso, quedó claro que entre las partes se firmó un contrato a término fijo de 3 meses, el cual fue prorrogado indefinidamente. Ahora bien, el artículo 67 del Código Civil, aplicado por analogía a lo laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresa:

*“Artículo 67. PLAZOS. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán, además, **hasta la media noche del último día de plazo.**”* (Negrilla fuera del texto).

---

<sup>1</sup> Código Civil artículo 1757

<sup>2</sup> Código General del Proceso artículo 167, inciso 1°

Se tiene que el contrato se comenzó a prorrogar por un año a partir del 21 de enero de 2014, siendo el último día el 20 de enero de 2017 y si bien se le notificó a la demandante la terminación del contrato con un término superior a los 30 días, el contrato se prorrogó nuevamente a partir del 21 de enero de 2017, fecha en la cual laboró la demandante para la Función Universitaria San Martín, prorrogándose el contrato el mismo término, razón por la cual la demandada debe cancelar a la demandante el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato, por ende, prospera la indemnización solicitada.

Así las cosas, esta Sala comparte la decisión del juez, debiendo en este sentido **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia.

Sobre las acreencias laborales tenemos, conforme lo dedujo el juez de la primera instancia, la demandada está obligada a cancelar a la accionante los conceptos de cesantía por el año 2014 por valor de \$733.280; primas del año 2016 por valor de \$1.019.18, teniendo en cuenta que tales cifras no fueron objeto de reparo por parte de la accionada en la apelación no se hará pronunciamiento alguno al respecto, no ocurriendo lo mismo con las vacaciones del año 2017 por valor de \$29.721, en cuanto a estas se observa en el plenario en el PDF 01 página 203, que efectivamente la correspondiente al año 2017 se cancelaron, razón por la cual se **REVOCA** la sentencia en lo concerniente al pago de vacaciones.

Con relación a dicha indemnización, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no entraña un actuar de buena fe el hecho de que una sociedad se encuentra atravesando una crisis financiera, pues ello implicaría trasladarle al trabajador la consecuencia de las pérdidas en su gestión, conducta claramente prohibida en el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo cuando establece el principio de ajenidad del riesgo.

Sobre este punto existe un nutrido precedente jurisprudencial del que se cita la Sentencia SL845-2021, en la que al respecto se dijo:

*“Por anticipado, se advierte que la censura tiene razón cuando asevera que el ad quem desacertó al concluir que la crisis financiera de la empresa constituye por sí sola una conducta justificante del impago de los salarios y prestaciones. En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que dichas situaciones no exoneran de la de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que es necesario que el empleador demuestre que esa circunstancia le produjo una insolvencia o iliquidez tal que le impidió cumplir con sus obligaciones laborales.*

*Bien puede ocurrir que, a pesar de encontrarse en crisis, la empresa tenga alternativas para cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo, porque aún tiene caja para pagar salarios y prestaciones, valores en cuentas bancarias o recursos disponibles. Pero también puede suceder que la debacle económica le impida por completo y sin salidas posibles, satisfacer las deudas laborales.”*

En lo que respecta a este caso en concreto, en la liquidación de acreencias No. AC 1313 del 11/12/2017, (obrante a folio 13 del expediente físico y digital) que fueron incorporadas en el pasivo del plan de pagos, en aplicación del Decreto 2070 del 23 de octubre de 2015, de otro lado es de anotar que los institutos de salvamento implican, entre otros efectos, la suspensión de procesos ejecutivos que se adelantan actualmente contra la institución y la imposibilidad de iniciar nuevos procesos de esta naturaleza, la cancelación de gravámenes y embargos decretados frente a los bienes y recursos de la Universidad.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que los jueces deben valorar previamente sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones adeudados a un trabajador al momento de la terminación del contrato, para efectos de determinar si dicha renuencia es o no de buena fe.

En armonía con lo anterior, la Sala concluye que no es procedente imponer las sanciones que reclama la parte, toda vez que se descarta por completo una actitud de mala fe.

Así las cosas, habrá de **REVOCARSE** el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia que se revisa y que alude a la condena por sanción moratoria, consagrados en el artículo 65 del Código del Trabajo.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **DECIDE**

**PRIMERO:** Se **REVOCA** el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia que se revisa, para en su lugar **ABSOLVER** a la accionada del pago de vacaciones y de la sanción moratoria, consagrados en artículo 65 del Código del Trabajo.



**SEGUNDO:** Se **CONFIRMA** en lo demás la sentencia.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Sandra Milena Castro
DEMANDADO	Fundación Universitaria San Martín
RADICADO	05-266-31-05-001-2018-00421
DECISIÓN	Revoca y confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de mayo de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
SECRETARIO